

Represión policial y grupos de protesta en Chile: Un estudio longitudinal

[Police repression and protest groups in Chile: A longitudinal study]

Rodrigo M. Medel ¹ y Nicolás M. Somma ²

¹Universidad Alberto Hurtado, Chile; ²Pontificia Universidad Católica de Chile

Resumen

La represión es el resultado de acciones policiales y una herramienta de poder del gobierno para relacionarse con la sociedad movilizada. Ésta ha sido bastante estudiada en contextos anglosajones, pero menos en América Latina y Chile. Por ello, este artículo buscó responder si algunos grupos movilizadas son más reprimidos que otros y si los gobiernos de centro-derecha reprimen más o menos que los gobiernos de centro-izquierda. Para esto, se usó una base de datos de 4,856 marchas callejeras ocurridas en Chile entre 2010 y 2019 y se modeló la represión policial hacia los manifestantes usando como predictores los grupos movilizadas y la ideología del gobierno nacional, además de algunas variables control. Los resultados revelan que los gobiernos de centro-derecha reprimen con mayor intensidad a los manifestantes que los gobiernos de centro-izquierda, donde la represión es particularmente más fuerte hacia a estudiantes e indígenas. Los resultados se discuten en función de la fortaleza de los vínculos entre movimientos sociales y la política institucional complementando el enfoque teórico de las debilidades, uno de los más importantes en la literatura sobre represión de la protesta.

Palabras clave: represión policial, estudios de represión, protestas, movimientos sociales

Abstract

Repression in the form of police action is an instrument used by governments to deal with a mobilized society. The phenomenon has been widely studied in Anglo-Saxon contexts, but less so in Chile and the rest of Latin America. This article explores whether some mobilized groups are more repressed than others, and whether center-right governments make greater or lesser use of repression than center-left governments do. We used a database of 4,856 street demonstrations that occurred in Chile between 2010 and 2019 in order to model police repression of protesters. We used mobilized group type and the ideology of the national government of the time as predictors, in addition to some control variables. Results reveal that center-right governments repress protesters more intensely than center-left governments do, with stronger action taken towards students and indigenous people. The results are discussed in terms of the strength of the links between social movements and institutional policy, complementing the theoretical approach that focuses on weaknesses—one of the most important in the literature on protest repression.

Keywords: police repression, repression studies, protests, social movements

Contacto: La comunicación sobre este artículo debe ser enviada a Rodrigo M. Medel, email rmedel@uahurtado.cl

Financiamiento: Los autores no declaran haber recibido financiamiento para este estudio.



INTRODUCCIÓN

Uno de los aspectos más estudiados en la tradición cuantitativa de movimientos sociales es la represión policial hacia la protesta colectiva. En toda manifestación pública existen diversos repertorios tácticos por parte de los manifestantes y respuestas variadas de los agentes represivos del Estado. Estas respuestas pueden ir desde no presentarse al evento, hasta enfrentamientos violentos con consecuencias graves como heridos e incluso muertos. Las principales explicaciones para entender la lógica detrás de la respuesta policial hacia la protesta puso el acento en las características de los eventos, o en el poder ejecutivo que controla en la mayoría de los casos a las fuerzas policiales (Earl et al., 2003). Sin embargo, ambas están íntimamente relacionadas, en tanto las características de un evento de protesta da luces sobre los costos de ejercer la acción colectiva y de reprimirla (Koopmans, 1993). Por eso, hace décadas existe una corriente que entiende a la represión policial de la protesta como una forma más de represión estatal usada de manera discrecional y estratégica por los gobiernos (Davenport, 2007; Davenport et al., 2005).

Existen varios estudios sobre los determinantes de la represión estatal hacia la protesta colectiva, aunque sus hallazgos no son necesariamente compatibles entre sí y son muy dependientes del contexto y los casos analizados. Entre quienes buscan explicar *in situ* la represión como variable dependiente, la literatura se divide en dos enfoques principales (Earl & Soule, 2005; Earl et al., 2003): el de amenaza y el de debilidad. El primero se refiere a que, cuando la policía o las autoridades

políticas ven a la protesta como amenazante—por ejemplo, por su masividad o por las tácticas empleadas—tenderán a reprimirla con mayor intensidad. Sin embargo, ello está en constante interacción con la fortaleza o debilidad con la que la policía y las autoridades vean a los grupos que están protestando. Así, la protesta resulta de una interacción permanente entre actores colectivos disidentes y poder político estatal (Franklin, 2009; Koopmans, 1993; Lichbach, 1987).

Estos aportes han sido valiosos para entender la coerción como un elemento central de la dinámica de la protesta colectiva y para entender mejor al poder ejecutivo y su capacidad de responder a fuerzas no institucionales dentro de un contexto político delimitado. Sin embargo, el estudio de la represión ha puesto un excesivo énfasis en las características de cada evento de protesta en sí mismo, y en la fortaleza o debilidad de los grupos de una manera excesivamente estática. Por ejemplo, las personas en situación de pobreza que viven en zonas urbanas suelen ser vistas como débiles. Sin embargo, la fortaleza o debilidad no se ha analizado en función de las relaciones cambiantes de cercanía o distancia entre elites políticas y los grupos que protestan. Estas relaciones suelen variar a lo largo del tiempo al ir cambiando las elites que ocupan el poder ejecutivo.

Argumentamos que el poder ejecutivo verá a los grupos que protestan como fuertes o débiles en función de los vínculos que han logrado tejer con la política institucional (Garretón, 2011). Un grupo de protesta organizado y con fuertes vínculos hacia la política institucional tiene mejores aliados con



los agentes del Estado, por ejemplo, con dirigencias provenientes de partidos políticos que son parte de un gobierno. Lo anterior aumenta las posibilidades de que las elites políticas vean como costosa la represión a dicho grupo. Al contrario, un movimiento que desafía la institucionalidad desde la autonomía con la política resulta más débil a los ojos del gobierno, lo que tendrá consecuencias observables en un aumento de la frecuencia e intensidad de la represión ejercida hacia el mismo.

Chile es un buen caso de estudio para nuestro argumento. Una amplia literatura (e.g., Barozet, 2016; Somma & Bargsted, 2015; Somma & Medel, 2016) muestra que durante la última década el país ha vivido un proceso creciente de autonomización o distanciamiento de la protesta colectiva respecto a la política institucional. Aquí planteamos que esa autonomización no ha sido homogénea, pues algunos grupos se han distanciado más que otros de la política institucional. Para los análisis empíricos, tomamos tres grupos de protesta que resultan emblemáticos en Chile. En primer lugar, los estudiantes universitarios, quienes luego de una transición a la democracia muy cercana a los partidos de centro-izquierda, se fueron distanciando de los partidos políticos tradicionales y de la política institucional en general (Somma & Medel, 2016) aunque cuentan con organizaciones fuertes, estables, y centralizadas, e incipientes vínculos hacia partidos políticos nuevos y otras organizaciones. En segundo lugar, las protestas de grupos Mapuche que, a diferencia de los estudiantes, se han mantenido completamente al margen de la política institucional a lo largo del período que contempla el presente estudio (Tricot, 2008). Y finalmente, las protestas de grupos de trabajadores del sector público que,

si bien también han vivido procesos incipientes de distanciamiento, mantienen los vínculos más fuertes con la política institucional y los partidos tradicionales (Osorio, 2016; 2017). Para estudiar esto usamos la base de conflictos del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES, 2020a), que captura más de 4800 marchas ocurridas en Chile entre el 2009 hasta el 2019 inclusive.

El estudio cuantitativo de la represión hacia las protestas

Hay pocas investigaciones cuantitativas de la represión hacia la protesta colectiva en América Latina, aunque su estudio en la literatura anglosajona tiene larga data. Primeramente la investigación puso el foco en los gobiernos autoritarios, bajo el supuesto de que la represión es propia de estos regímenes por ser un recurso necesario para mantenerse en el poder (Lichbach, 1987). Posteriormente, la investigación puso énfasis en los gatillantes específicos de la represión en el evento mismo de la protesta (Davenport et al., 2011) y recientemente se ha problematizado la existencia de distintos tipos, intensidades y niveles de violencia de la represión in situ (Davenport et al., 2011; Earl et al., 2003). En este estudio nos centramos en la represión policial in situ como una extensión o manifestación específica de la represión estatal pues, aunque ésta tiene múltiples manifestaciones, los datos disponibles sobre el comportamiento de la policía permiten distinguir de manera más sistemática las respuestas del gobierno hacia los distintos grupos de protesta en Chile. El enfoque de amenaza y el de debilidad se usan para explicar la represión in situ (Earl & Soule,



2005; Earl et al., 2003). El enfoque de amenaza pone el acento en la amenaza percibida por los gobiernos por parte de los movimientos sociales (Davenport, 2007). El origen de esta perspectiva reside en los pioneros trabajos de Tilly (1978) quien planteó que, en la medida que la protesta crezca en tamaño, más amenazante será para los gobiernos y que estos aumenten su represión violenta. Posteriormente, las investigaciones se ampliaron hacia las tácticas más transgresivas (McAdam, 1982) o las demandas más radicales (Earl et al., 2003) que, por ser vistas como más amenazantes por el gobierno, generarían una respuesta represiva más severa (McAdam, 1982). Desde el enfoque de debilidad, la represión sería más frecuente y severa para movimientos percibidos como débiles por las autoridades pues, al contar con menos recursos para defenderse, serían blancos más fáciles de atacar y sus protestas más fáciles de aplacar. Por ejemplo, los movimientos de pobres urbanos, minorías raciales, o de grupos marginados, serían vistos como débiles por el gobierno por su menor capacidad de tomar represalias en contra de la violencia ejercida contra ellos (Piven & Cloward, 1979), por lo que habría poco reparo a la hora de reprimirlos incluso de manera violenta. En una perspectiva asociada a la movilización de recursos, se entiende también a grupos débiles como aquellos que carecen de organizaciones formales de movimientos sociales (Earl et al., 2003), lo que los llevaría tener una menor capacidad de enfrentar la represión in situ. En síntesis, hay evidencia de que las protestas más masivas (Earl & Soule, 2005; Earl et al., 2003; Tilly, 1978), con tácticas transgresivas o violentas (Earl et al., 2003; McAdam, 1982), con demandas más radicales (McAdam, 1982),

contraculturales, de grupos sociales desaventajados, y con presencia de minorías raciales (Davenport et al., 2011), serán reprimidas de manera más severa y con mayor frecuencia que protestas que carezcan de estos rasgos.

En este trabajo ponemos el acento en la dimensión fortaleza o debilidad de los grupos que protestan. Planteamos que el incentivo para reprimir que tenga el poder ejecutivo no estará dado únicamente por la debilidad de los grupos que protestan, sino también en relación con los vínculos que han logrado establecer con la política institucional a lo largo del tiempo. Eso implica que los grupos no son intrínsecamente débiles o fuertes, sino que esto depende de cada caso en específico y de las redes que hayan logrado tejer con el poder institucional. Cuando un grupo tiene vínculos estrechos con la política, el poder ejecutivo será más renuente a reprimir—intensamente—las protestas porque al hacerlo estaría poniendo en riesgo alianzas, apoyos, y popularidad entre grupos leales o cercanos. Por otro lado, el poder ejecutivo tiene mayores posibilidades de cooptar o encauzar institucionalmente a los movimientos cercanos, lo que también desestimula el uso de la represión. Por último, un grupo mejor conectado con agentes del poder aumenta los costos políticos de la represión. Sin embargo, cuando tales vínculos son débiles, los riesgos para el poder ejecutivo en términos de pérdida de aliados y apoyos son menores, y las posibilidades de cooptación son más escasas, lo que podría generar que la represión sea más intensa. Además, los movimientos que no están vinculados al ejecutivo son menos conocidos y, por tanto, los eventuales costos políticos de la represión son menos anticipados por los agentes del Estado.



A continuación, proponemos una descripción de tres grupos de protesta que han tejido relaciones diferenciadas con la política en Chile. Esto los hace interesantes de analizar y comparar a la luz de nuestros argumentos.

Relaciones entre institucionalidad política y protesta social

El contexto político chileno se ha caracterizado por tener un parlamento poco permeable frente a la acción de los actores de la sociedad civil (Ruiz, 2007). Esto se debe, entre otras cosas, a que desde la transición hacia la democracia hubo una cerrazón política entre las dos coaliciones de centroizquierda (i.e., Concertación de Partidos por la Democracia) y centroderecha (i.e., Alianza por Chile). Debido al sistema binominal estas coaliciones ocuparon más del 95% de los escaños del parlamento hasta que la reforma electoral de 2015 instauró un sistema más proporcional que facilitó la llegada al parlamento de nuevas fuerzas políticas en las elecciones del 2017. Así y, dado que muchas reformas estructurales requieren altos quórum, muchos parlamentarios se vieron impedidos de llevar a cabo las demandas de los movimientos por la vía institucional, lo que lleva a que en el parlamento no haya habido *tribunas del pueblo* (Tarrow, 1998) y que, cuando existieron hayan sido poco efectivas. Esta ineficacia de la política institucional ha sido un ingrediente clave en el aumento en la protesta colectiva desde el año 2006 (Somma & Medel, 2016), y ha generado un progresivo distanciamiento de ciertos grupos de protesta respecto a los actores políticos institucionales (Barozet, 2016; Garretón, 2011; Somma & Medel, 2016).

En este contexto, los movimientos sociales han apuntado sus dardos sobre todo al poder ejecutivo, esperando que sea el gobierno, mediante una acción directa y no una apertura institucional o el poder legislativo, quien dé una solución inmediata a sus demandas. El escenario callejero es por antonomasia el lugar de choque inmediato entre los movimientos y el ejecutivo, por lo que la presencia o no de represión en las protestas es también una consecuencia directa del tipo de relación que establezcan ambos actores. De ahí la centralidad de estudiar las relaciones de cercanía o lejanía que los movimientos han construido con la política institucional, ya sea de manera estable o variable a lo largo del tiempo. En este estudio tomamos tres grupos de protesta: estudiantes universitarios, grupos Mapuches, y el laboral del sector público. Los seleccionamos no sólo por ser emblemáticos como actores movilizadores, sino porque cada uno ha mantenido relaciones diferentes con la política institucional y porque estas relaciones han variado en el tiempo, lo que ofrece un escenario fructífero para examinar nuestro argumento.

Estudiantes universitarios

El proceso de cerrazón política descrito más arriba impactó fuertemente al movimiento estudiantil que experimentó una paulatina separación de bases y dirigencias respecto a los partidos políticos institucionales desde la transición a la democracia. Ello comenzó en los años 90, con la reconstrucción de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), pero profundizó luego de la segunda mitad de la década del 2000 (Thielemann, 2011), cuando se produjo un renacer del movimiento



estudiantil (Garretón, 2011). Este se caracterizó por una creciente autonomía respecto a los partidos políticos tradicionales. Dentro de los grupos emergentes que comenzaron a dirigir al movimiento estudiantil, cobró relevancia la figura del *colectivo político*, como forma de organización distinta a la partidista tradicional (Avendaño, 2014).

La organización por medio de colectivos políticos ha logrado superar con creces a la antigua conducción de los partidos tradicionales, y representa mejor a un estudiantado que, hasta la aparición del Frente Amplio como actor político en 2017, no veía reflejados sus intereses en la esfera institucional (Avendaño, 2014). Esto ha llevado a que se reivindique la autonomía de la política institucional como un valor que está presente en el discurso de los principales dirigentes que se organizan y autogestionan en organizaciones cada vez más distantes de los partidos tradicionales (Somma & Medel, 2016). Este proceso de mayor autonomía no implica una pérdida de influencia en la esfera política. De hecho, el movimiento estudiantil ha sido posiblemente el movimiento que más impacto ha generado en la agenda política los años recientes vía reformas institucionales (Somma & Medel, 2016). Estas reformas, sin embargo, no siempre coinciden con los intereses de los colectivos y de las fuerzas políticas que habitan en las universidades, y en ningún caso han logrado cooptar a un movimiento que se manifestó crecientemente alejado de los gobiernos, sean de centroderecha o centroizquierda (aunque esto podría cambiar con la asunción del nuevo gobierno de izquierda desde marzo de 2022). Estos grupos están respaldados por organizaciones fuertes, estables y con vínculos de larga data con la política institucional, como son las federaciones

de estudiantes de distintas universidades y la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH). Recientemente, parte del movimiento estudiantil ha logrado cierta institucionalización por medio de los partidos del Frente Amplio, coalición nacida en 2017. Así, la eventual debilidad que se pudiera desprender de una ausencia de vínculos hacia la política desde las bases es matizada por su fortaleza organizacional, así como por los vínculos hacia los nuevos partidos de izquierda.

Trabajadores del sector público

La refundación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en 1988, tiene su origen en un acuerdo político entre los partidos de la incipiente Concertación, que habían logrado mantener vínculos con el mundo sindical durante la lucha contra la dictadura de Augusto Pinochet. Desde sus orígenes la nueva CUT buscó ser un brazo sindical del pacto de centroizquierda concertacionista, y no un instrumento de lucha obrera revolucionaria como en los años 60 (Osorio, 2017). Así, la nueva CUT tuvo un planteamiento mucho más reformista que transformador. Durante los primeros años de la transición, hubo un predominio de una política moderada, que postergó las demandas de un nuevo código laboral para el sector privado para privilegiar la política de transición de la coalición de centroizquierda. Esto se expresó en un predominio abultado de los partidos políticos tradicionales, los que representaron cerca del 90% de las votaciones de la CUT durante la década de los 90 (Osorio, 2016). Esta moderación ha tenido múltiples consecuencias, siendo una de ellas el quiebre de vínculos con el sindicalismo del sector

privado. Diversos estudios indican que la CUT se ha transformado principalmente en un agente de defensa de los intereses de los empleados del sector público (Medel, 2021, Quiroga et al., 2016), encontrándose muy determinada por la cercanía hacia los partidos políticos (Medel, 2017).

En este sentido, uno de los mayores logros del sindicalismo de los trabajadores del Estado, es que han logrado institucionalizar de manera no formal el apoyo de la multisindical en la mesa del sector público (MSP), la única negociación ramal que ocurre todos los años en Chile. En todas estas negociaciones, a diferencia de lo que ocurre en el sector privado, adquieren mucha relevancia las centrales sindicales, principalmente la CUT y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). En esta mesa los dirigentes negocian directamente con representantes del Ministerio de Hacienda (Quiroga et al., 2016). Las redes partidarias en ambas centrales sindicales son fundamentales, y todos sus presidentes han pertenecido a partidos de la antigua Concertación o de la Nueva Mayoría. Estos vínculos entre las centrales de trabajadores y el gobierno se distanciaron durante los gobiernos de centroderecha, pero no fue así con los vínculos entre las centrales y los partidos tradicionales. De ahí que las alianzas de las centrales de trabajadores con la política institucional sigan siendo un elemento altamente relevante para las huelgas del sector público, por cuanto proveen recursos organizacionales, movilizan las influencias políticas, y transmiten la expertiz necesaria para presionar a los gobiernos y hacer avanzar sus demandas (Quiroga et al., 2016).

Organizaciones Mapuche

Buscar explicar la diversidad política de organizaciones y comunidades mapuche y la complejidad de sus relaciones con el Estado chileno excede las posibilidades de este trabajo. Sin embargo, en un consciente ejercicio de simplificación, existen algunas generalidades que pueden dar luces para interpretar las movilizaciones y marchas convocadas explícitamente por grupos mapuche. Si los comparamos con grupos estudiantiles universitarias o de los empleados públicos, representan nuestro caso de mayor autonomía y exclusión de la política institucional durante todo el período estudiado. Buscando una breve reconstrucción de la historia reciente, podemos encontrar un primer hito en la comuna de Nueva Imperial en diciembre de 1989, en vísperas a las elecciones que abrirían el paso a la transición democrática, cuando representantes de organizaciones indígenas suscribieron un acta de compromiso con Patricio Aylwin (en aquel entonces, candidato presidencial). El punto principal del acuerdo fue la promesa de devolución paulatina de tierras las que debían ser entregadas gradualmente a las comunidades y familias (Bengoa, 2002).

Sin embargo, en menos de una década surgió una nueva generación de jóvenes que no se sintieron comprometidos con el pacto de Nueva Imperial. Esto tuvo como hito fundamental las protestas de Lumaco en 1997 (Tricot, 2009). Dos comunidades mapuche de la sureña comuna de Lumaco procedieron a la recuperación de territorios ancestrales, derivando



en la quema de camiones de la forestal Bosques Arauco. Un año después, la decisión de la construcción de la represa Ralco, sin tomar en cuenta la cuestión indígena, estalló en una serie de conflictos que terminó por sepultar el pacto inaugurado 10 años antes en Nueva Imperial. Las comunidades de Malleco, Arauco, y Cautín fueron las primeras en comenzar movilizaciones saliéndose del marco establecido en los acuerdos anteriores. A partir de ello, hubo un renacer de la demanda autonomista en sectores significativos de la población y la intelectualidad mapuche. Esta demanda ha ido más allá de un acto de reparación de tierras, definiendo un nuevo escenario político (Foerster & Vergara, 2000).

Las formas de acción más directa de este movimiento han sido fuertemente transgresivas, en territorios rurales, y con grupos que operan sin una organización centralizada visible (Somma & Medel, 2016). También se han llevado a cabo movilizaciones en espacios públicos y marchas en ciudades grandes, sobre todo del sur. Dichas convocatorias se han dado casi en su totalidad al margen de vínculos directos con la política institucional. Es decir, se marca una clara diferencia con los puentes que han empezado a recuperar los grupos estudiantiles con los partidos institucionales, así como los que han mantenido durante todo el tiempo estudiado los trabajadores del sector público.

MÉTODO

Objetivos e hipótesis

El objetivo de este artículo es dar cuenta de las diferencias en la intensidad con la que se ejerce la represión policial hacia distintos grupos movilizados. Los tres casos que consideramos nos permiten elaborar hipótesis de trabajo en base a la literatura revisada. La separación entre política institucional y movimientos sociales ha sido un fenómeno relevante desde la transición, coincidente con una pérdida de influencia de los partidos políticos en las bases de las organizaciones sociales. Sin embargo, esta separación ha sido casi total en el caso del movimiento Mapuche autonomista; parcial y paulatina en el caso del movimiento estudiantil; y casi nula en el caso del movimiento de trabajadores del sector público.

Nuestro argumento es que, la represión es más frecuente y severa en aquellos grupos de protesta que mantienen vínculos débiles con la política institucional pues las posibilidades de cooptar a sus dirigentes disminuyen, y aumenta el nivel de amenaza que representan para las autoridades. Así postulamos que, en promedio y controlando por las características de las marchas, la represión estará más presente en el movimiento Mapuche, y menos presente en el caso del movimiento laboral, quedando el movimiento estudiantil en un punto intermedio entre ambos extremos (H1).

Segundo, esperamos que la represión hacia estos tres grupos de protesta varíe según la ideología del gobierno. Es decir, si entendemos como un

factor de fortaleza o debilidad la relación de cercanía entre grupos de protesta y política institucional, entonces dicha relación debería ser condicional a quienes se encuentran ocupando el Estado. Nos interesa sobre todo el caso del movimiento laboral, donde deberíamos observar una probabilidad más baja de represión cuando la centroizquierda está en el poder, y más alta con gobiernos de derecha, aunque no descartamos una mayor represión de los gobiernos de centroderecha hacia todos los grupos (H2).

Como hipótesis complementaria, esperamos observar respaldo respecto a la teoría de la amenaza según el despliegue mismo de la protesta. Así, protestas con características tradicionalmente entendidas como amenazantes (i.e., alta convocatoria y presencia de acciones violentas), serán más reprimidas que aquellas que carecen de esas características (H3).

Estrategia metodológica y datos

Nuestro estudio está basado en la metodología llamada análisis de eventos de protesta (AEP; Rucht & Koopmans, 2002). El AEP consiste en construir una base de datos que codifica eventos que tienen lugar en un espacio y período de interés. La principal fuente de información son noticias de periódicos nacionales y otros medios de prensa sobre protestas colectivas en lugares públicos y privados. La gran ventaja del AEP es que permite sustituir juicios vagos por un conocimiento preciso y detallado sobre la protesta. Por esto, el AEP es la metodología más utilizada para estudiar la represión de la acción colectiva (Earl & Soule, 2005; Koopmans, 1997).

La base de datos que se usó en esta investigación es la Observatory of Conflicts – Cumulative Dataset (COES, 2020a). Esta se construyó siguiendo el ejemplo de la metodología del Observatorio de Huelgas Laborales (COES, 2020b) y del estudio Dynamics of Collective Action Project (McAdam et al., 2009), con las adaptaciones necesarias para el caso chileno. Para construirla, el equipo del Observatorio revisó sistemáticamente 18 medios de comunicación escrita, de los cuales tres son nacionales y 15 regionales (uno por cada región). Estos registros fueron codificados por un equipo estable de codificadores siguiendo una serie de controles de remuestreo y de confiabilidad intercodificador. Para el período de estudio (2009-2019) se consideraron únicamente marchas y manifestaciones públicas, ya que consideramos que es la unidad de análisis que mejor se adecúa a los objetivos de nuestra investigación y a nuestras hipótesis. Por ejemplo, si el evento es un ataque a inmobiliario público o privado, es muy probable que tenga una respuesta represiva por parte de la policía, independiente del grupo que la lleva a cabo. Distinto el caso de las marchas, donde se puede controlar por el tipo de tácticas para observar exclusivamente el efecto del grupo de la protesta sobre el comportamiento de los agentes del Estado. Por lo tanto, quedan fuera actos como sabotaje, saqueos, ataque a inmobiliario público, entre otros, a menos que sean tácticas complementarias insertas en las marchas. Esto incluye más de 4,800 casos para el período estudiado, excluyendo de la muestra aquellas protestas que tienen valores perdidos en las otras variables del análisis.

Variables

Para medir la represión policial al grupo manifestante, seguimos la literatura internacional (Earl & Soule, 2005) y distinguimos tres niveles de represión, según se puede inferir de la noticia: (1) la policía no se hace presente en la marcha; (2) hay suficiente presencia policial como para ser reportada en la noticia, pero ésta no ejerce represión alguna; y (3) la policía se enfrenta a los manifestantes con los métodos tradicionales y/o con enfrentamientos directos. En consecuencia, operativamente, recodificamos y sumamos una serie de variables que aluden a distintas manifestaciones de la acción policial dentro de una protesta, y las codificamos en una sola variable que tiene tres categorías: (1) ausencia de policías; (2) presencia policial sin acción directa (la pura presencia de policías puede ser un indicador, aunque quizás el más leve, de represión en las protestas); y (3) acción represiva, que incluye el uso de bombas lacrimógenas, gases y/o carros lanzaguas, arrestos, y enfrentamientos directos entre manifestantes y policías.

La Figura 1 muestra la distribución de los distintos tipos de represión para cada año del estudio, para marchas o manifestaciones públicas. Los eventos de protesta que no cuentan con presencia policial son los más comunes, con cerca de un 71% de las protestas. Cerca de un 10% de los eventos anuales reportan únicamente presencia policial en el lugar de la marcha sin acción represiva. Finalmente, cerca de un 20% de los eventos hay acciones represivas hacia los manifestantes. Debido al aumento explosivo en el número de protestas el año 2019, se observa una frecuencia mayor, así como un porcentaje mayor de acciones

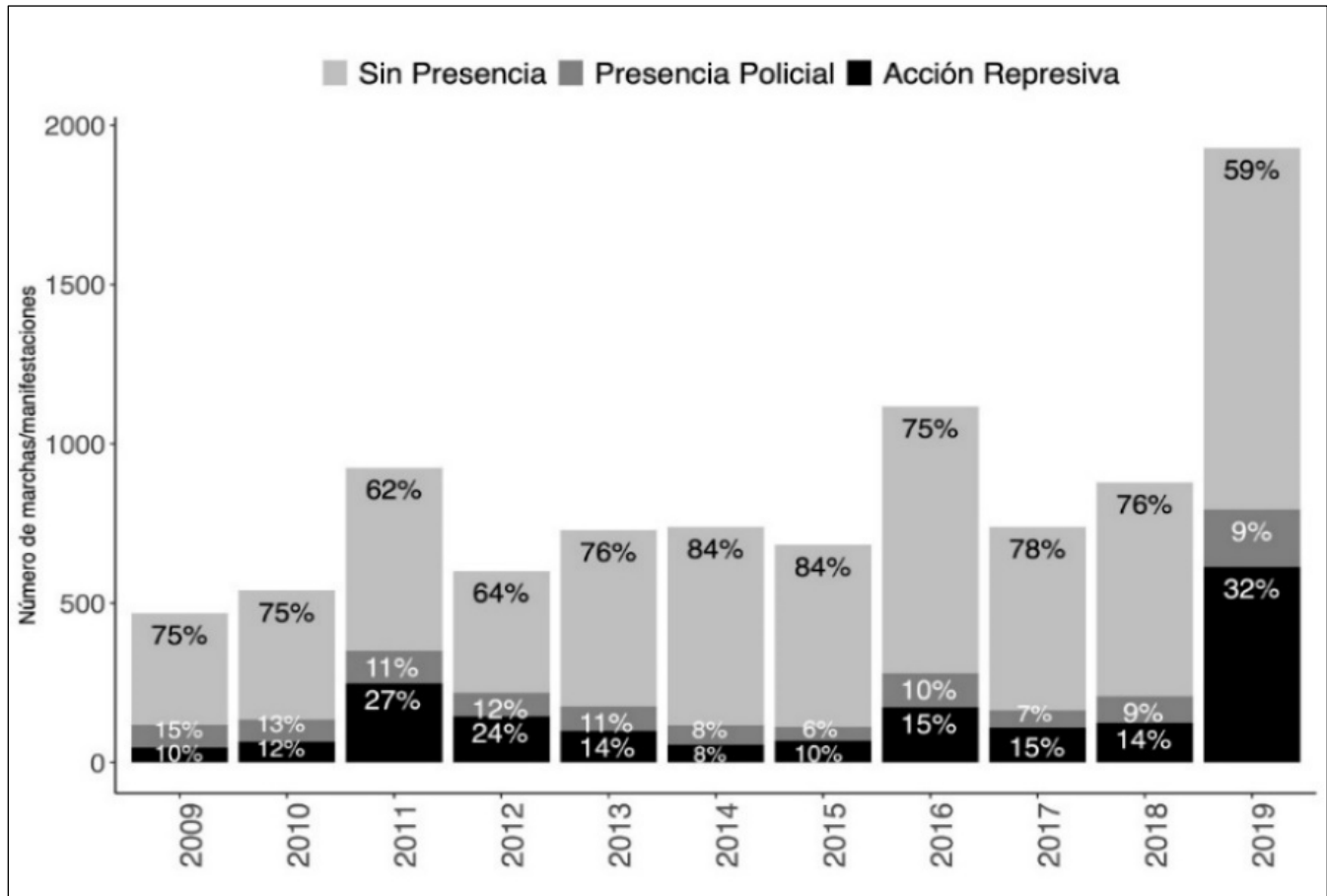
represivas. Un dato descriptivo difícil de obviar es que los dos años con mayor porcentaje de represión de toda la serie (2011 y 2019) ocurre durante la existencia de gobiernos de derecha, cuando aproximadamente una de cada tres manifestaciones públicas fue reprimida por la policía.

Por su parte, las variables independientes centrales son dos: el grupo que protesta y el signo político del gobierno. Respecto al grupo de protesta, nos enfocamos en los tres grupos desarrollados en el marco teórico: Mapuche, estudiantes universitarios y trabajadores del sector público. Para no perder casos del análisis incluimos tres categorías adicionales, a saber: residentes/pobladores, ambientalistas, y la categoría de otros, que incluye una gran diversidad de movimientos.

En cuanto al tipo de gobierno, dado el tiempo que abarca la base de datos (2009-2019) alcanzamos a incluir tres gobiernos recientes: (a) el primer gobierno de Piñera de 2010-2013; (b) el segundo gobierno de Bachelet de 2014-2017; y (c) el segundo gobierno de Piñera de 2018-2019. No incluimos el primer gobierno de Bachelet porque culminó en 2009 e incluirlo habría sido incorporar sólo uno de sus cuatro años de mandato, lo que podría sesgar el análisis. La Figura 2 muestra el porcentaje de tipos de represión por grupos y por gobierno.

En el análisis de eventos como marchas y manifestaciones públicas es central controlar por variables que podrían estar afectando los resultados. Por ejemplo, puede que un tipo de gobierno haya recibido mayor cantidad de tácticas violentas durante las marchas, o que durante un gobierno en particular haya habido manifestaciones más masivas y que esto condicione los resultados. Por lo mismo, contemplamos variables de control que

Figura 1. *Número de Marchas por año y Tipos de Represión*

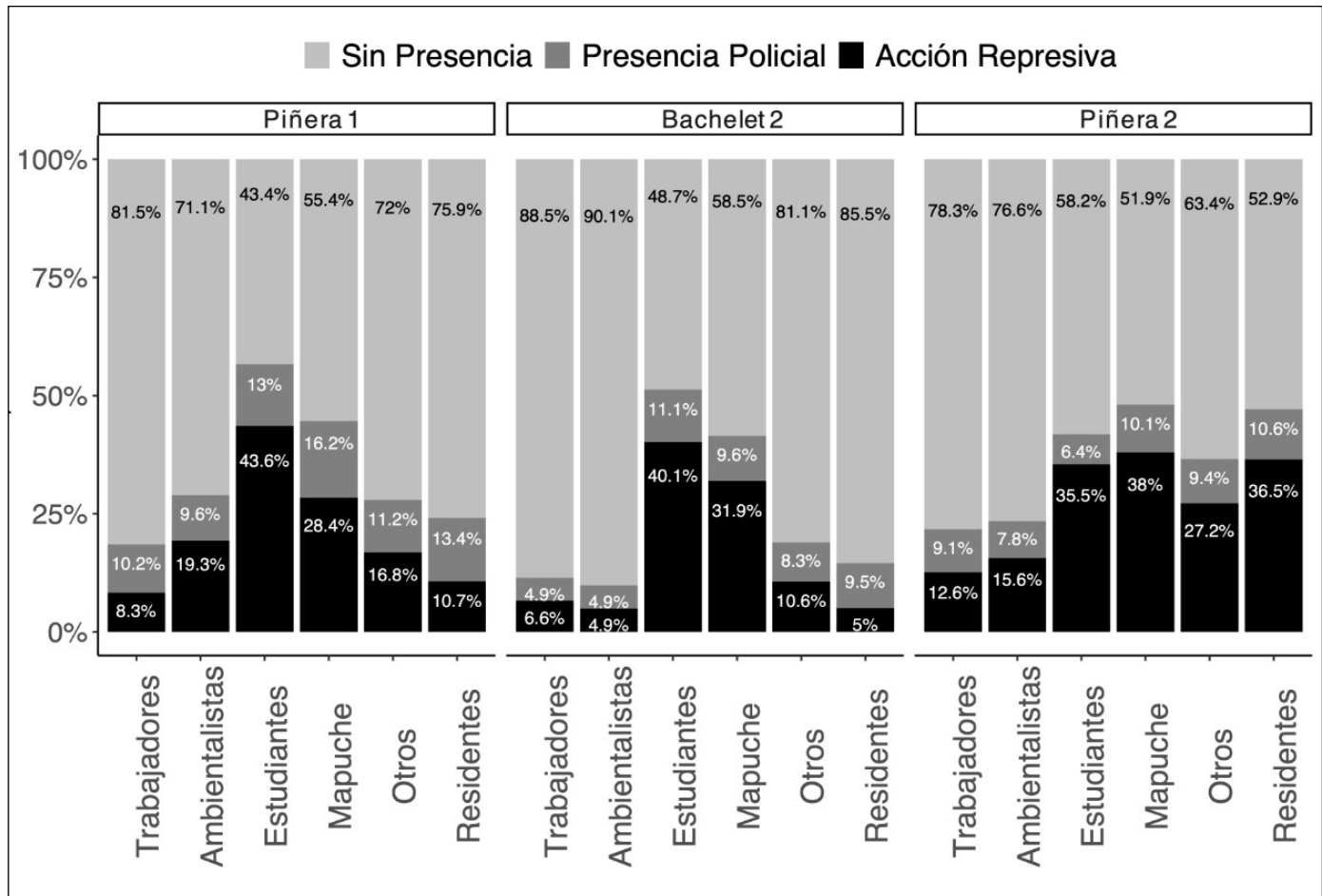


fueron incluidas en los análisis multivariados y fueron elegidas en función de criterios sustantivos o teóricos.

Primero, incluimos la variable tiempo, o año (tratada como continua). Nos interesó observar si había tendencias lineales a lo largo del tiempo en relación con los distintos tipos de represión y controlar el efecto de los gobiernos por una eventual tendencia general a aumentar la represión en las marchas. Luego, incluimos el número de participantes en el evento, para medir la amenaza que el evento

supone para el poder ejecutivo y la policía, pues si aumenta el número de participantes, mayor será la amenaza percibida por el gobierno y por ende aumentará el incentivo para reprimir la protesta (Tilly, 1978). El número de participantes se capturó con la estimación entregada en la noticia misma, o su promedio cuando este dato fue reportado por diversos medios o los manifestantes y por la policía (para detalles ver Tabla 1).

Figura 2. *Represión por Grupos Movilizados y Gobiernos Nacionales*



Nota. Piñera 1 = primer gobierno de Sebastián Piñera (2010 a 2013). Bachelet 2 = Segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014 a 2017). Piñera 2 = Segundo gobierno de Sebastián Piñera (2018 a 2019).

Para controlar por la violencia ocurrida en las marchas, incluimos dos variables. La primera es dicotómica, indicando la presencia o ausencia de encapuchados (i.e., manifestantes que cubren su rostro) en las marchas. Éste es un indicador tradicional de choque entre manifestantes y policías en Chile. La segunda variable, también dicotómica, indica la presencia o ausencia de tácticas violentas por parte de los manifestantes en el evento. Según otras investigaciones, este es

uno de los predictores más importantes de presencia de represión en la protesta (Davenport et al., 2011; Earl et al., 2003). Para esto se recodificó la presencia de actos violentos en la táctica secundaria al evento principal (cuando esta es una marcha o manifestación pública). Las tácticas violentas, como opuestas a tácticas pacíficas, incluyen todas aquellas que suponen un riesgo físico para los manifestantes, la policía o terceros (Medel & Somma, 2016).



Tabla 1

Estadísticos Descriptivos de Variables Consideradas en los Análisis

Variable / categorías	n	%	Variable / categorías	n	%
Represión			Tamaño grupo manifestantes		
Sin presencia	6676	71.4%	Muy pequeño	231	4.5%
Presencia policial	923	9.9%	Chico (10 a 40)	1179	23.2%
Acción represiva	1751	18.7%	Mediano (50 a 100)	557	10.9%
Grupos			Cientos	716	14.1%
Trabajadores	1971	21.1%	Miles	272	5.3%
Ambientalistas	274	2.9%	Decenas de miles	8	0.2%
Estudiantes	983	10.5%	Inestimable	2127	41.8%
Mapuche	267	2.9%	Encapuchados		
Otros	4469	47.8%	Ausencia	9140	97.8%
Residentes	1386	14.8%	Presencia	210	2.2%
Gobierno			Tácticas violentas		
1° Gob. Piñera	2835	32.0%	Ausencia	8872	94.9%
2° Gob. Bachelet	3279	37.0%	Presencia	478	5.1%
2° Gob. Piñera	2744	31.0%	Años 2009 a 2019		
				11 valores	

Análisis

Dado que la lógica de las categorías supone un ordenamiento lineal, realizamos un test de Brant (1990), para corroborar que no había violación del supuesto de rectas paralelas. Confirmado lo

anterior, utilizamos modelos de regresión logística ordinal (Long, 1997) para poner a prueba nuestras hipótesis. Para visualizar mejor el comportamiento de la variable dependiente en los distintos grupos, calculamos y graficamos probabilidades predichas.

RESULTADOS

Nuestro objetivo fue evaluar el impacto del grupo y tipo de gobierno sobre la represión policial, controlando por varias características de las marchas. La Tabla 2 presenta dos modelos logísticos ordinales. El primero muestra los efectos de primer orden de las variables independientes. El segundo agrega interacciones entre el grupo que

protesta y el gobierno. A continuación, presentamos los resultados para la primera hipótesis. La Figura 3 muestra las probabilidades predichas a partir del modelo 1 de la Tabla 2. En ella destaca la represión diferenciada por grupo donde la probabilidad de observar marchas con presencia policial (sumando la presencia con y sin represión) es



cerca de un 45% para grupos Mapuche. Esto contrasta con las marchas de trabajadores, con apenas un 11.6% de presencia policial. En el caso de los estudiantes es cerca de un 38%. La Tabla 2 muestra que el contraste en el grado de represión de estos grupos es estadísticamente significativo, tomando como referencia al grupo de trabajadores.

La probabilidad de observar acción represiva varía considerablemente entre los grupos. Los trabajadores tienen un 7.2% de probabilidades de ser reprimidos en las marchas y manifestaciones, los estudiantes un 27.62%, y los Mapuche un 33.29%. Es decir, tanto estudiantes como Mapuche tienen una mucho mayor probabilidad que los trabajadores de recibir represión, con diferencias significativas al 99.9% de nivel de confianza.

En síntesis, consistente con el estudio de Piven y Cloward (1979), en este estudio la presencia de grupos con organizaciones más fuertes (i.e., trabajadores) se asocia a una menor presencia de represión. Los trabajadores son quienes tienen menos probabilidad de ser reprimidos en todas sus formas. A los estudiantes se les suele reprimir más, pero menos que a los grupos Mapuche, muy probablemente vistos como más débiles por las autoridades. Estos resultados son consistentes con la hipótesis 1.

En cuanto a las variables de control, partimos mencionando las variables asociadas a las características del evento de protesta mismo, que muestran resultados interesantes. En primer lugar, de la mano con la teoría de la amenaza (Davenport, 2007), una mayor convocatoria en el evento aumenta las probabilidades de observar represión disuasiva, y sobre todo represión más

intensa, es decir, enfrentamientos y violencia. Lo mismo ocurre con las tácticas violentas, donde la represión tiene 15.4 veces más chances ($b = 2.8$, $OR = 16.4$) de ocurrir cuando hay presencia de estas tácticas en la protesta con efectos significativos. Ambos resultados son consistentes con la hipótesis 3. Además, la presencia de encapuchados también es significativa a un 99.9% de nivel de confianza en todas las formas de represión. Todo lo anterior da respaldo a la importancia que revisten las características desplegadas en el evento para comprender las determinantes de la represión estatal hacia la protesta colectiva y lo importante que resulta controlar por ellas.

Finalmente, la variable tiempo tiene un comportamiento interesante en el modelo de regresión. Vemos que el aumento en un año aumenta significativamente las chances de observar presencia policial y represión (ver Tabla 2). Esto nos dice que, en general, ha aumentado la probabilidad de que los eventos sean reprimidos con el paso del tiempo en Chile.

Por su parte, la Figura 4 permite examinar el efecto del gobierno en la represión hacia los distintos grupos movilizados (hipótesis 2). Ella presenta la probabilidad predicha de cada respuesta estatal hacia las marchas según el gobierno de turno. En lo sustantivo, se observa que el segundo gobierno de Piñera tuvo más del doble de probabilidades de emplear acción represiva (22.3%) que el segundo gobierno de Bachelet (10.6%), quedando el primer gobierno de Piñera entre medio (14.3%). Estas diferencias son estadísticamente significativas, aun controlando por el año y las características de los eventos.



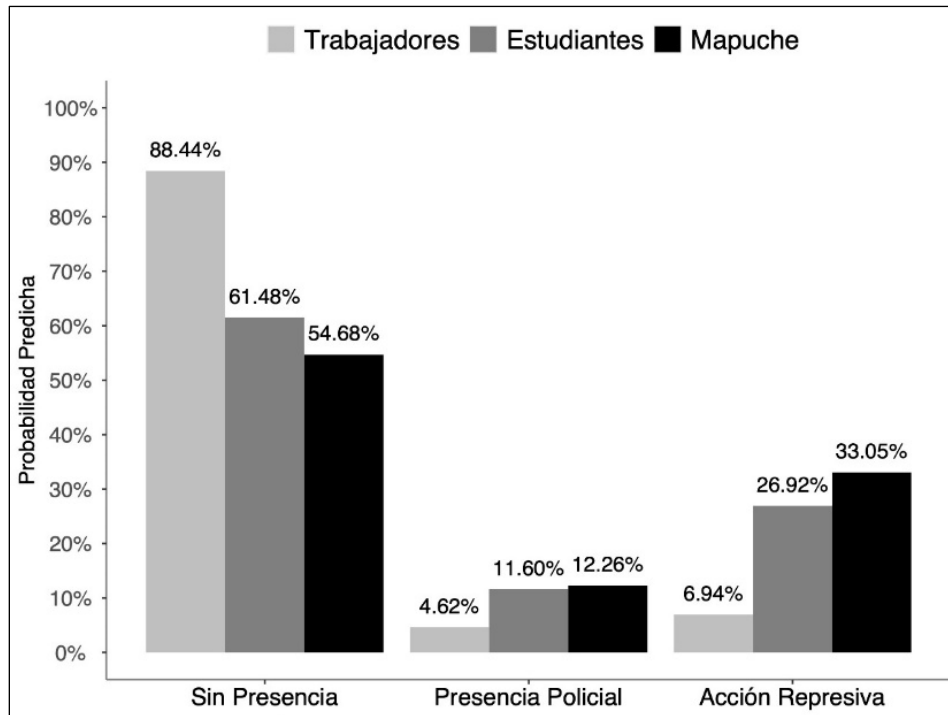
Tabla 2

Modelos de Regresión Logística Ordinal Para Represión

Variables		Modelo 1	Modelo 2
Gobierno	Bachelet 2	-1.04** (0.20)	-0.88* (0.32)
(Ref. Piñera 1)	Piñera 1	-0.89* (0.31)	-0.74 (0.40)
Grupos	Ambientalistas	-0.12 (0.32)	0.30 (0.50)
(Ref. trabajadores)	Estudiantes	1.58** (0.16)	1.53** (0.30)
	Mapuche	1.85** (0.23)	1.92** (0.48)
	Otros	0.76** (0.11)	0.91** (0.24)
	Residentes	0.89** (0.13)	0.94** (0.28)
Tamaño grupo	Chico	0.32 (0.25)	0.34 (0.25)
manifestantes	Mediano	0.60* (0.26)	0.60* (0.26)
(ref. muy pequeño)	Cientos	0.95** (0.25)	0.94** (0.25)
	Miles	1.86** (0.27)	1.84** (0.27)
	Decenas de miles	3.39** (0.75)	3.40** (0.75)
	Inestimable	1.00** (0.24)	1.01** (0.24)
Año		0.16 ** (0.04)	0.15** (0.04)
Tácticas Violentas (ref. pacíficas)		2.80** (0.16)	2.77** (0.17)
Encapuchados		1.77** (0.30)	1.73** (0.30)
Grupo Ambientalistas x Bachelet 2			-0.63 (0.76)
Grupo Estudiantes x Bachelet 2			0.26 (0.38)
Grupo Mapuche x Bachelet 2			0.44 (0.59)
Grupo otros x Bachelet 2			-0.26 (0.31)
Grupo residentes x Bachelet 2			-0.35 (0.39)
Grupo Ambientalistas x Piñera 1			-0.66 (0.78)
Grupo Estudiantes x Piñera 1			-0.30 (0.44)
Grupo Mapuche x Piñera 1			-0.82 (0.62)
Grupo otros x Piñera 1			-0.16 (0.29)
Grupo residentes x Piñera 1			0.07 (0.34)
Pseudo R ²		.243	.246
AIC / BIC		5,719 / 5,835	5,722 / 5,904
Loglikelihood / Deviance		-2,841 / 5,683	-2,833 / 5,666

Nota. Los resultados de la tabla corresponden a coeficientes de regresión logística ordinal. Los errores estándar de los coeficientes se muestran entre paréntesis. Piñera 1 = primer gobierno de Sebastián Piñera, ocurrido entre 2010 y 2013. Bachelet 2 = Segundo gobierno de Michelle Bachelet, ocurrido entre 2014-2017. Piñera 2 = Segundo gobierno de Sebastián Piñera ocurrido entre 2018-2019. * p < .05. ** p < .01. El tamaño de la muestra en ambos modelos fue 4,556.

Figura 3. Probabilidades Predichas de Experimentar Represión Según Grupo Movilizado



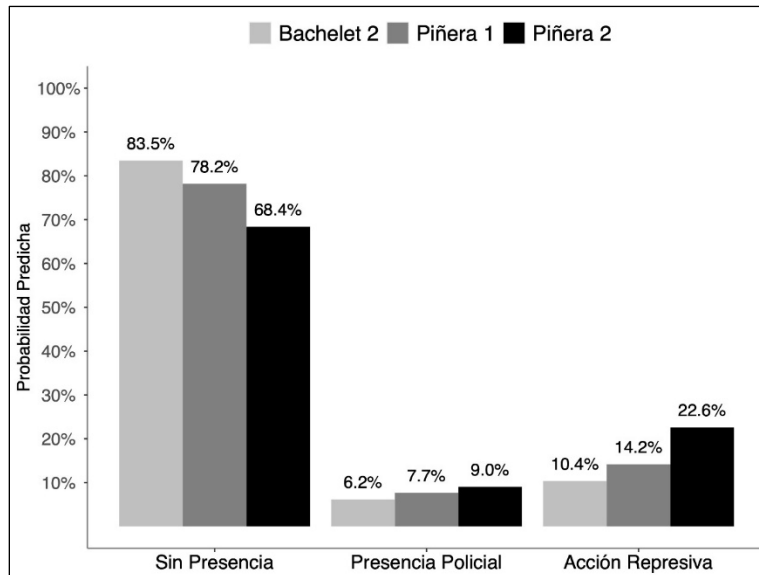
Nota. El cálculo de probabilidades predichas por grupo se basó en el Modelo 1, para lo cual se calculó la probabilidad de todos los valores observados utilizados en el modelo, luego se sacó un promedio de la probabilidad de cada categoría de la variable dependiente según los distintos grupos. Para facilitar la interpretación, se excluyen los grupos distintos a los tres principales de este análisis.

Este es un hallazgo interesante que sirve para avanzar hacia el contraste de la hipótesis 2. Como nos interesa en particular el efecto del gobierno en la represión de los trabajadores, en el modelo 2 (Tabla 2) incorporamos una interacción entre grupo de la protesta y gobierno de turno. Contrario a lo hipotetizado, este modelo muestra que el efecto del grupo en la represión es similar en los distintos gobiernos. Los resultados muestran además que no se gana mucho en explicación de la varianza al incorporar la interacción, por lo que no resulta pertinente incorporar dicha especificación al análisis.

Esto no quiere decir que no haya mayor represión en los gobiernos de derecha (ver Figura 4), sino que dicha mayor represión no está condicionada hacia grupos en específico, o por lo menos no de manera estadísticamente significativa.

Para profundizar en el análisis, hemos estimado y graficado las probabilidades predichas de observar los distintos tipos de represión para cada grupo según los distintos gobiernos. En la Figura 5 se pueden observar las distintas intensidades de represión que vivió cada grupo en distintos gobiernos. Nuevamente se ve que el segundo gobierno de Piñera generó

Figura 4. *Represión Según Gobierno de Turno (Probabilidades Predichas)*



Nota. El cálculo de probabilidades predichas por grupo se basó en el Modelo 1, para lo cual se calculó la probabilidad de todos los valores observados utilizados en el modelo. Luego, para facilitar la interpretación, se sacó un promedio de la probabilidad de cada categoría de la variable dependiente según los distintos gobiernos.

una represión más intensa comparado con su primer gobierno y respecto al segundo gobierno de Bachelet. La Figura 5 muestra una particularidad que no resulta evidente en el modelo 2: el aumento de la acción represiva para las protestas estudiantiles y Mapuche en el segundo gobierno de Piñera, comparado con el segundo gobierno de Bachelet y el primer gobierno de Piñera. En el movimiento estudiantil la probabilidad de represión de parte del gobierno fluctuó entre un 26%, 25.4% y 32.1% en los gobiernos de Piñera (1° gobierno), Bachelet y Piñera (2° gobierno) respectivamente. El aumento de la represión en el segundo gobierno de Piñera es todavía más marcado para protestas Mapuche. Aunque esta tendencia puede estar afectada por la represión durante el estallido social de fines de 2019, nos parece que este endurecimiento de

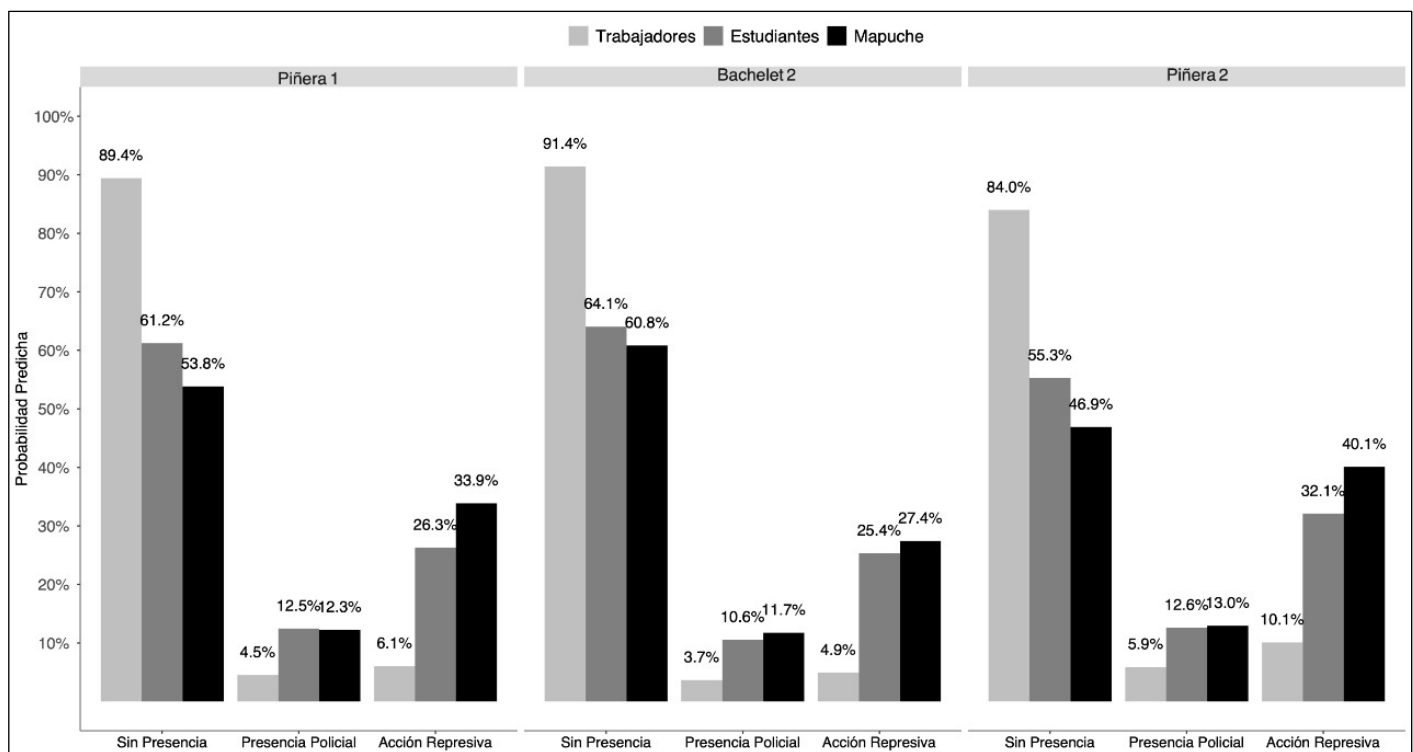
la represión puede obedecer a la profundización del distanciamiento de estudiantes y mapuches respecto al segundo gobierno de Piñera.

Si bien la intensidad de la represión hacia los grupos se ve condicionada por el color político de los gobiernos, lo que es un indicio importante para la segunda hipótesis, los resultados de la Tabla 2 muestran que la interacción entre grupos de protesta y gobierno no resulta ser significativa. Es decir, el orden de los grupos más y menos reprimidos no se ve significativamente alterado según el tipo de gobierno. Con estos resultados podemos ver que los distintos gobiernos sí han tenido un impacto en la represión ejercida, lo que, de acuerdo con nuestro argumento, es reflejo de las relaciones de mayor y menor cercanía entre grupos de protesta y política institucional.

Que el orden de los grupos reprimidos no varíe significativamente entre gobiernos lo podemos interpretar como un factor de estabilidad respecto a la evaluación que el Estado hace sobre la fortaleza o debilidad de cada grupo de protesta. Es decir, que las relaciones que los distintos grupos tejen con los agentes de la política y los partidos tienen raíces profundas, que no se condicionan de manera sustantiva (por lo menos en este análisis) por el color político del gobierno. Por lo tanto, si bien hay un efecto del gobierno que incide en los grupos a los que se reprime más o menos, también hay

cierta estabilidad en el orden de esas diferencias entre gobiernos. Los gobiernos de derecha estudiados reprimen con mayor intensidad a estudiantes y Mapuche, sobre todo el segundo gobierno de Piñera, mientras que el gobierno de centroizquierda reprimió con algo menos de intensidad, pero con diferencias similares entre grupos. La principal estabilidad es la del movimiento de trabajadores del sector público, quien ha mantenido relaciones más estables con la política institucional, es el menos reprimido de los tres y el que ha sufrido una represión más constante a lo largo del tiempo.

Figura 5. Probabilidades Predichas de Represión por Gobierno y Grupo



Nota. El cálculo de probabilidades predichas se basó en el Modelo 2, para lo cual se calculó la probabilidad de todos los valores observados utilizados en el modelo, luego se sacó un promedio de la probabilidad de cada categoría de la variable dependiente según los distintos grupos y gobiernos. Para facilitar la interpretación, se excluyen los grupos distintos a los tres principales de este análisis.

CONCLUSIONES

La democracia chilena se caracterizó durante el período de la transición a la democracia por ser un sistema fuertemente presidencial y con un aparato legislativo muy cerrado frente a la influencia de los grupos de presión de la sociedad civil. Ello ha condicionado, entre otros elementos, que los grupos de protesta vean en el gobierno y el poder ejecutivo, el principal interlocutor para satisfacer sus demandas. Así, el poder ejecutivo tiene la potestad de promulgar o bloquear la legislación según la capacidad que logren los grupos de protesta de penetrar en su agenda legislativa (Aninat, 2006). No obstante, el poder ejecutivo además concentra la capacidad de dirigir a la policía y sus órganos represores para bloquear, dividir o suprimir las demandas de los movimientos sociales que vea como una amenaza para su gobierno. Asimismo, el gobierno suele concentrar la represión en aquellos grupos que evalúe como débiles y busca evitar la represión hacia grupos de presión más poderosos.

En este artículo buscábamos reposicionar a la política como un elemento central para entender las lógicas de la represión estatal hacia la protesta colectiva. En específico, planteamos que el incentivo que tenga el Ejecutivo para reprimir o no a los manifestantes, no estará dado únicamente por los grupos que ve como amenazantes o débiles en el despliegue mismo de la protesta, sino también por los vínculos que se han logrado establecer entre grupos sociales y política institucional a lo largo del tiempo, lo que está a su vez condicionado por la ideología del gobierno.

Además de observar variables clásicas incluidas en estudios de represión, y controlando por ellas, tomamos tres grupos sociales que tienen vínculos disímiles con la política institucional: los trabajadores del sector público con vínculos fuertes; los grupos Mapuche con vínculos débiles; y los estudiantes universitarios, que vive un proceso de acercamiento reciente hacia la política (a partir de la conformación de fuerzas que pasaron a integrar el Frente Amplio), pero que mantienen fuerte autonomía. Observamos la frecuencia e intensidad con que estos grupos son reprimidos, de manera transversal y en función de los distintos gobiernos. Los análisis multivariados dan respaldo a los hallazgos previos de estudios de represión con metodología de análisis de eventos de protesta, sobre todo en cuanto a las variables asociadas a las amenazas: eventos con mayor número de participantes, con tácticas más transgresivas y con grupos violentos, tienen mayor probabilidad de ser reprimidos.

Controlando por estas características del evento de protesta, encontramos que las marchas de trabajadores del sector público son las menos reprimidas de los tres; las marchas de grupos Mapuche son las que tienen más probabilidades de sufrir represión; y las marchas estudiantiles se encuentra entre medio de estos dos grupos. Esto es consistente con nuestro argumento general de que los grupos con vínculos más fuertes con la política institucional serán menos reprimidos que los más autonomizados. Adicionalmente, si bien en el modelo de regresión las interacciones entre grupos y gobiernos no son significativas, al



observar las probabilidades predichas para cada tipo de represión encontramos un endurecimiento de esta hacia estudiantes y Mapuche durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Esto puede atribuirse al distanciamiento de ambos grupos respecto a ese gobierno, eventualmente manifestado en el estallido social de fines de 2019.

Las limitaciones de nuestro estudio no nos permiten ahondar más en los micro mecanismos, o en la racionalidad de los actores (gobierno o movimientos), con la profundidad que quisiéramos.

Por ello, dejamos abierta esta veta de estudios para futuros acercamientos cualitativos y cuantitativos hacia el fenómeno de la represión con una entrada desde la política. En un contexto de relaciones cambiantes entre la protesta y las vías institucionales, se hace cada vez más patente la necesidad de estudiar las respuestas del gobierno hacia los movimientos sociales, ya sea como puentes emergentes de comunicación o como fuentes de conflicto entre el sistema político y la sociedad civil.

REFERENCIAS

- Aninat, C. (2006). Balance de poderes legislativos en Chile: ¿Presidencialismo exagerado o base de un sistema político cooperativo? *Política*, 47, 128–148. <https://revistapolitica.uchile.cl/index.php/RP/article/view/16794>
- Avendaño, O. (2014). Fracturas y representación política en el movimiento estudiantil. *Última Década*, 41(1), 41–68. <http://doi.org/10.4067/S0718-22362014000200003>
- Barozet, E. (2016). Entre la urna, las redes sociales y la calle: Las relaciones entre movimientos sociales y partidos políticos en el Chile democrático. En M. A. Garretón (Ed.), *La gran ruptura* (pp. 21–58). LOM.
- Bengoa, J. (2002). *Historia de un conflicto: El estado y los Mapuches en el Siglo XX*. Planeta.
- Brant, R. (1990). Assessing proportionality in the proportional odds model for ordinal logistic regression. *Biometrics*, 46(4), 1171–1178. <https://doi.org/10.2307/2532457>
- Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. (2020a). *Observatory of conflicts - Cumulative dataset* (Versión V6) [Set de datos]. Harvard Dataverse. <https://doi.org/10.7910/DVN/GKQXBR>
- Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. (2020b). *Observatory of labor strikes - Cumulative dataset* (Versión V4) [Set de datos y codebook]. Harvard Dataverse. <https://doi.org/10.7910/DVN/LOVXAQ>
- Davenport, C. (2007). State repression and political order. *Annual Review of Political Science*, 10(1), 1–23. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.10.1.01405.143216>
- Davenport, C., Johnstron, H., & Mueller, C. (2005). *Repression and mobilization*. University of Minnesota Press.
- Davenport, C., Soule, S. A., & Armstrong, D. A. (2011). *Protesting while black?: The differential policing of American activism, 1960 to 1990*.



- American Sociological Review*, 76(1), 152–178. <https://doi.org/10.1177/0003122410395370>
- Earl, J., & Soule, S. (2005). Seeing blue: A police-centered explanation of protest policing. *Mobilization*, 11(2), 145–164. <https://doi.org/10.17813/mai.11.2.u1wj8w41n301627u>
- Earl, J., Soule, S. A., & McCarthy, J. D. (2003). Protest under fire? Explaining the policing of protest. *American Sociological Review*, 68(4), 581–606. <https://doi.org/10.2307/1519740>
- Foerster, R., & Vergara, J. I. (2000). Los mapuches y la lucha por el reconocimiento en la sociedad chilena. En M. Castro (Ed.), *XII Congreso Internacional. Derecho consuetudinario y pluralismo legal: Desafíos en el tercer milenio* (pp. 191–206). Comisión de Derecho Consuetudinario y Pluralismo Legal; Universidad de Chile; Universidad de Tarapacá.
- Franklin, J. C. (2009). Contentious challenges and government responses in Latin America. *Political Research Quarterly*, 62(4), 700–714. <https://doi.org/10.1177/1065912908322405>
- Garretón, M. A. (2011). Movilizaciones y movimiento social en la democratización política chilena. En R. Quirosa-Cheyrouze (Ed.), *La sociedad española en la transición. Los movimientos sociales en el proceso democratizador* (pp. 107–122). Biblioteca Nueva.
- Koopmans, R. (1993). The dynamics of protest waves: West Germany, 1965 to 1989. *American Sociological Review*, 58(5), 637–658. <https://doi.org/10.2307/2096279>
- Koopmans, R. (1997). Dynamics of repression and mobilization: The German extreme right in the 1990s. *Mobilization an International Journal*, 2(2), 149–164. <https://doi.org/10.17813/mai.2.2.e6g82877674x6048>
- Lichbach, M. I. (1987). Deterrence or escalation? *Journal of Conflict Resolution*, 31(2), 266–297. <http://doi.org/10.1177/0022002787031002003>
- Long, S. (1997). *Regression models for categorical and limited dependent variables*. Sage.
- McAdam, D. (1982). *Political process and the development of black insurgency*. The University of Chicago Press.
- McAdam, D., McCarthy, J., Olzak, S., & Soule, S. (2009). *The dynamics of collective action project*. <http://www.stanford.edu/group/collectiveaction/cgi-bin/drupal/>
- Medel, R. (2017). Alliances et autonomie politique. Les deux faces du syndicalisme Chilien. *Cahiers des Amériques latines*, (86), 49–69. <https://doi.org/10.4000/cal.8352>
- Medel, R. (2021). La CUT y los clivajes sindicales en Chile. Entre la pretensión transformadora y la estrategia defensiva. *CUHSO (Temuco)*, 31(1), 176–199. <http://doi.org/10.7770/cuhso.v31i1.2450>
- Medel, R., & Somma, N. (2016). ¿Marchas, ocupaciones o barricadas? *Política y Gobierno*, 23(1), 163–199. <http://www.politicaygobierno.cide.edu/index.php/pyg/article/view/738>
- Osorio, S. (2016). Central Unitaria de Trabajadores: Rol histórico, trayectoria política y desafíos para un nuevo sindicalismo. *Solidaridad*. <https://bit.ly/3BIrhAC>



- Osorio, S. (2017). De la estrategia concertacionista al sindicalismo de contención. Un balance de la CUT en la postdictadura, 1990-2016. En C. Santibáñez, J. I. Ponce, & J. Pinto (Eds.), *Trabajadores y trabajadoras. Procesos y acción sindical en el neoliberalismo chileno 1979-2017* (pp. 127–153). América en movimiento.
- Piven, F., & Cloward, R. (1979). *Poor people's movements Why they succeed, how they fail*. Vintage Books.
- Quiroga, F., Guerrero, N., & Schuster, S. (2016). Discurso público e institucionalización del conflicto político en Chile: El caso del reajuste salarial del sector público (1990-2014). *Gestión y Política Pública*, 25(1), 119–163. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-10792016000100004&script=sci_arttext
- Rucht, D., & Koopmans, R. (2002). Protest event analysis. En B. Klandermans & S. Staggenborg (Eds.), *Methods of social movement research* (Vol. 16, pp. 231–259). University of Minnesota Press.
- Ruiz, C. (2007). Actores sociales y transformación de la estructura social. *Revista de Sociología*, 21(1), 209–233. <https://doi.org/10.5354/rds.v0i21.27525>
- Somma, N., & Bargsted, M. (2015). La autonomización de la protesta en Chile. En C. Cox & J. C. Castillo (Eds.), *Socialización política y experiencia escolar: Aportes para la formación ciudadana en Chile* (pp. 207–240). Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación; Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Somma, N., & Medel, R. (2016). Shifting relationships between social movements and institutional politics. En M. von Bulow & S. Donoso (Eds.), *Social movements in Chile: Organization trajectories and political impacts* (pp. 29–61). Palgrave-MacMillan. https://doi.org/10.1057/978-1-137-60013-4_2
- Tarrow, S. (1998). *Power in movements*. Cambridge University Press.
- Thielemann, L. (2011). Para una periodificación del movimiento estudiantil de la transición (1987-2011). *Revista Pretérito Imperfecto*, 1(2), 1–12. <https://bit.ly/3JETTfO>
- Tilly, C. (1978). *From mobilization to revolution*. Addison-Wesley.
- Tricot, T. (2008). Identidad y política en el nuevo movimiento mapuche. *Historia Actual Online*, (15), 29–50. <http://doi.org/10.36132/hao.v0i15.232>
- Tricot, T. (2009). Lumako: Punto de inflexión en el desarrollo del nuevo movimiento mapuche. *Historia Actual Online*, (19), 77–96. <https://doi.org/10.36132/hao.v0i19.300>

Manuscrito recibido: 17-marzo-2022

Manuscrito aceptado: 31-mayo-2022